

El plan de Castells que irrita a los rectores: ideas bolivarianas y ataque a las privadas

► El ministro envía a consulta un documento de trabajo para su futura ley con la que quiere contentar a los movimientos estudiantiles con más poder

JOSEFINA G. STEGMANN
MADRID

El ministro de Universidades Manuel Castells ha puesto a disposición de rectores, sindicatos, consejos sociales, estudiantes, comunidades autónomas y agencias de evaluación un documento de trabajo sobre la futura ley de Universidades (LOSU). En él, Castells pide «ideas, propuestas y trabajo previo» a los miembros de la comunidad universitaria consultados en torno a cinco bloques que formarán parte de la futura ley Castells.

El documento está planteado a modo de preguntas, por lo que todo está sobre la mesa y nada se ha concretado. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que las propuestas sean miradas con mucha desconfianza por los rectores y otros miembros de la comunidad universitaria consultados por ABC. Por ejemplo, en el apartado dedicado a la financiación se consulta sobre la fiscalidad de las universidades privadas: «Hay que distinguir las universidades privadas sin y con ánimo de lucro. ¿Creéis que debe haber un trato fiscal distinto en función del tipo de universidad? ¿En qué sentido?», señala el documento.

Los rectores y otros miembros de la comunidad universitaria aseguran que las preguntas no son inocentes, en el sentido de que «es un cuestionario cargado de ideología que obliga a posicionarse», denuncia un rector que prefiere no desvelar su identidad. «Formulan las preguntas de una manera que parece que quisieran ir a pillar», se quejan desde otro colectivo que recibió el documento.

El ataque, «tónica común»

El planteamiento sobre la fiscalidad a las universidades privadas no ha gustado a estos campus que vieron delante de sí un 'viejo fantasma'. El pasado mes de octubre se generó gran polémica cuando el Gobierno planteó eliminar la exención de IVA de la educación privada en la configuración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, medida que finalmente no se aplicó, pero que ahora parece volver: «Esto no puede formar parte de una ley orgánica del sistema universitario», lamenta la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, quien reconoce que no les sorprende este tipo de preguntas en el documento de Castells. «El ataque de

las privadas es una tónica común de la mayor parte de las iniciativas legislativas del Ministerio de Universidades; siempre dicen que formamos parte del sistema pero a la hora de la verdad no es así: hay convocatorias para subvenciones y proyectos de investigación de los que, en cuanto pueden, nos excluyen», lamenta Visiedo. Un rector de una universidad pública comparte esta opinión: «No creo que una ley de universidades deba abordar eso. Que vaya a una norma fiscal, no a la de universidades».

Partidos de izquierda

Tampoco han gustado a los rectores las preguntas planteadas en torno a la representación estudiantil. El documento recoge las reivindicaciones de las organizaciones estudiantiles que plantean que «es fundamental que el estudiantado esté debidamente representado en todos los órganos de gobierno, con mayor proporcionalidad que la actual, como para poder influir realmente en todas sus funciones. Defendemos, también, que en la Mesa de moderación/Equipo Directivo de los distintos órganos de Gobierno, haya miembros que sean estudiantes para que se pueda participar de forma activa en la elaboración de los órdenes del día y se fomente una mayor transferencia de información», recoge el documento entre algunas de las propuestas del alumnado, concretamente de Creup, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, con una gran representación de los partidos de izquierda en su seno.

El documento pregunta: «¿Cuáles son



El ministro de Universidades, Manuel Castells, en el Congreso

vuestras consideraciones a este respecto? ¿Planteáis alguna propuesta concreta?» Para uno de los rectores consultados el apartado dedicado a la representación estudiantil «es una idea bolivariana con la que el ministro busca quedar bien. Lo plantea para que otros digan no y quedar el ministerio como el bueno de la película». «Son ideas bo-

livarianas, demagógicas, populistas... El ministro desconoce desconoce el funcionamiento de la universidad que es muy consultiva». Por su parte, Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid dice que Castells «quiere cambiar la dinámica de la representación de los estudiantes porque quiere quedar bien con ellos, más bien con algunos en concreto, los de las asociaciones que le escriben por correo», y recuerda que, de hecho, los alumnos tienen más poder en las elecciones a rector que el que tiene el Personal de Administración y Servicios (PAS).

«Bueno para su popularidad»

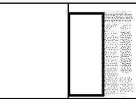
Otro rector consultado dice que «no hay ninguna institución excelente basada en un gobierno asambleario; esto no existe en ninguna universidad, ONG, fundación, etc». Añade que Castells «es un ministro puesto por un partido cuyo perfil es el populismo bolivariano decadente» y que él también es populista: «El ejemplo más claro para congraciarse con los estudiantes es cuando ofrece algo que le gusta a ellos, pero que es perjudicial para los mismos, como cuando defendió los exámenes online frente a los presenciales. Un examen onli-

La inversión en educación, por debajo del 5% del PIB prometido por el PSOE

La inversión en educación en 2019 ascendió a 53.052,7 millones de euros, según la Estadística del Gasto Público en Educación, publicada ayer por el Ministerio de Educación. Según el departamento de Isabel Celaá se trata de una cifra que se sitúa en niveles de 2010 (53.099,3 millones), por detrás del año 2009, y que supone un incremento del 4,7% respecto a la inversión de 2018.

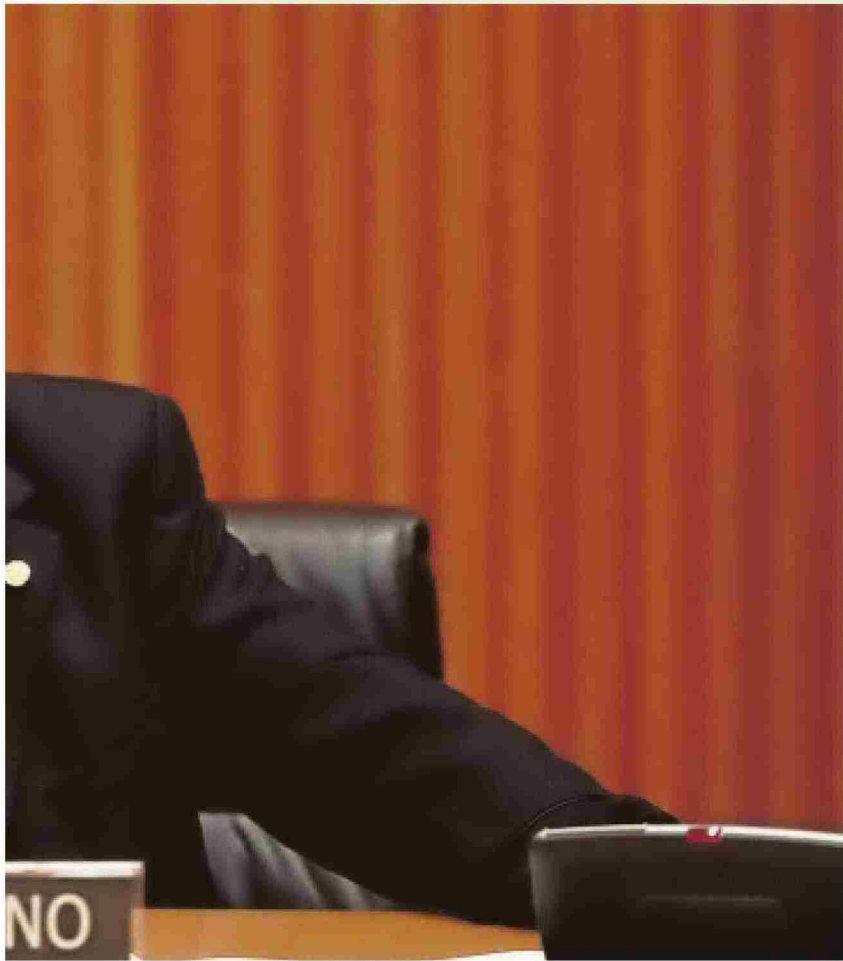
En términos relativos al Producto Interior Bruto, la educación en 2019 se situó en el 4,26%, por encima del 4,21% de 2018.

En cualquier caso, está todavía por debajo del 5% del PIB que prometió el PSOE y por lo que abandonó el Pacto Educativo en 2018. Además, sigue por debajo del PIB de los años 2013-2016, años en los que gobernaba el PP.



«Antes del verano»

Castells dijo en el Congreso que esta semana ha empezado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para poner en marcha la nueva ley. Su objetivo es que «a principios de verano» se cuente con un anteproyecto que será llevado al Consejo de Ministros antes de que acabe 2021 para iniciar su tramitación parlamentaria a lo largo de 2022.



EP

ne quiere decir que se pueda copiar, exactamente es eso. Cuando defendió a los estudiantes con esa postura dejó a los pies de los caballos a los rectores, fue desastroso». En definitiva, toma decisiones «malas para los estudiantes, malas para las universidades pero buenas para su popularidad».

Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca dice que «la participación de los estudiantes en los órganos de Gobierno es un logro democrático; somos el país europeo donde esa participación es mas intensa». A su juicio, «la universidad española necesita reformas que la refuercen, no anun-

cios que generen desazón; Castells tiene que resolver problemas, no crearlos». Los estudiantes, por su parte, aseguran que hay una representación desigual dependiendo de la universidad: «Es muy desigual, hay órganos en los que no estamos representados y el porcentaje máximo en el que estamos es del 23% cuando somos el mayor colectivo de la universidad», denuncia Andrea Paricio, presidenta de Creup.

Financiación

Otro apartado que no ha gustado es el de la financiación. En el documento de consulta se habla de la «gran diversidad de modelos según comunidades y las significativas divergencias de esfuerzo de financiación de las universidades en función de la administración educativa de adscripción».

Por eso, piden opinión sobre la medida planteada por «agentes» de la comunidad educativa que proponen garantizar un porcentaje mínimo de financiación a las universidades en el PIB de cada comunidad. «Si se vincula la financiación al PIB aumentarán las diferencias entre los campus de las diferentes comunidades», dice uno de los rectores consultados.

Gobierno asambleario
«No hay ninguna institución excelente basada en un gobierno asambleario»

Excluidos
«Dicen que las privadas formamos parte del sistema pero a la hora verdad no es así»